Globethics Repository



La difícil recomposición de Colombia [The difficult restructuring of Colombia]

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see https://www.globethics.net. Data and content policy of Globethics Repository see https://repository.globethics.net/pages/policy.

Item Type	Article
Authors	Restrepo,Luis Alberto
Publisher	Fundación Friedrich Ebert (FES)
Rights	Creative Commons Copyright (CC 2.5)
Download date	2026-11-15 02:57:47
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/218820

La difícil recomposición de Colombia

Colombia llegó al borde del colapso integral a mediados de los años 90. Con serias fallas, los gobiernos de Pastrana y Uribe han ido recomponiendo la sociedad y el Estado en diversos campos, pero sobre todo en el terreno de la seguridad. Sin embargo, el conflicto armado, el narcotráfico y su vínculo recíproco siguen siendo la amenaza inmediata más grave para el país. Si avanzaran las negociaciones con los paramilitares y el ELN, se daría un paso importante hacia la paz. De lo contrario, el conflicto podría intensificarse. Mientras, la política estadounidense contra las drogas ayuda a combatir el narcotráfico y sus efectos y al mismo tiempo los estimula. Con todo, se puede esperar que Colombia mantenga cierta estabilidad, sometida sin embargo a un creciente caudillismo en desmedro de la democracia.

Luis Alberto Restrepo

La evolución de Colombia y las políticas de su presidente, Álvaro Uribe, suscitan percepciones encontradas en el país y en el exterior. Mientras más de un 70% de colombianos aprueba la gestión de Uribe, sectores minoritarios lo tildan de autoritario y hasta de fascista. En algunos medios de comunicación y

Luis Alberto Restrepo: filósofo colombiano; profesor asociado del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales - Iepri, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
Palabras clave: situación política, crisis, conflicto interno, Gobierno, Colombia.

grupos militantes de América Latina y Europa corren toda suerte de críticas y rumores sobre Uribe y su política de seguridad. Las mismas Naciones Unidas hacen sentir con frecuencia sus reservas frente a las políticas del gobierno colombiano. Pero, al mismo tiempo, casi todos los gobernantes de América Latina, así como los de Europa y desde luego el de Estados Unidos, han manifestado su solidaridad con la ofensiva de Uribe contra los grupos armados.

Para comprender la dinámica evolución de Colombia es necesario dar una breve mirada hacia atrás.

La crisis de los años 90

Entre 1994 y 1998, el escándalo suscitado por la penetración de dineros «calientes» en la campaña electoral del presidente Ernesto Samper puso a la nación entera, y no solo al Estado, al borde de un colapso integral: político, diplomático, militar, económico y moral.

En efecto, descubiertos los primeros indicios, la Fiscalía emprendió el sonado «proceso 8.000» en contra del presidente, algunos de sus ministros y numerosos dirigentes políticos. La sociedad colombiana se fragmentó aún más. Clases medias y altas y poderosos medios de comunicación emprendieron una dura oposición a Samper, mientras políticos liberales lo defendían con vehemencia, las centrales sindicales le daban un tibio respaldo y el resto de los colombianos permanecía indiferente. Diversas fuentes de EEUU señalaron a Colombia como «narcodemocracia», la Casa Blanca promovió el aislamiento internacional del Gobierno, y redujo sus vínculos diplomáticos con el país al trato con el director de la Policía, en torno del tema del narcotráfico. La economía sufrió un estancamiento que condujo, en 1999, a su primera recesión en 70 años. Aprovechando la debilidad gubernamental, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia crecieron hasta sumar unos 20.000 hombres, y le propinaron 16 rudos golpes a las fuerzas militares, que perdieron oficiales de alta graduación y numerosos suboficiales, sufrieron el aniquilamiento de fuerzas de elite, perdieron bases clave en el sur del país, mientras la guerrilla capturó más de 500 prisioneros, así como equipo, fusiles y piezas de artillería liviana. La desmoralización cundió en las filas castrenses. Además, el descrédito del Gobierno le permitió al grupo subversivo conquistar simpatías en América Latina y Europa, a pesar de su propia impli-

Desde 1998 la sociedad y el Estado colombianos vienen avanzando en una difícil y contradictoria recomposición

cación orgánica en el negocio de las drogas. Ante la situación, grupos paramilitares antes dispersos se dieron en 1997 una coordinación nacional, fijaron una estrategia conjunta y se propagaron por todo el país. Comenzó a dibujarse entonces el horizonte de una guerra civil. La debilidad gubernamental para enfrentar la crisis y la impotencia de los colombianos ante la situación produjeron un desaliento cuyo síntoma más evidente fue una oleada masiva de emigración.

Una contradictoria recomposición nacional

Teniendo en cuenta este cuadro, se puede afirmar que, desde 1998 hasta hoy, la sociedad y el Estado colombianos vienen avanzando en una difícil y contradictoria recomposición, de final todavía incierto.

Logros del gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002). Muchos colombianos consideran hoy a Pastrana como uno de los peores presidentes que le haya tocado al país. Y su gobierno tuvo, indudablemente, graves fallas. Sin embargo, le dio un giro fundamental al rumbo de la nación e inició el camino de su recuperación.

Colombia, como la mayor parte de sus vecinos, es un país presidencialista. La gente no cree en las instituciones. Prefiere poner su confianza en cada nuevo gobernante, de quien espera milagros, pero como no se producen, termina denigrando de él. Pastrana no escapó a esa tendencia. Fue recibido con euforia por amplios círculos sociales que hoy lo consideran como un presidente frívolo, ausente y sin liderazgo. De hecho, no pudo reactivar la economía. El desempleo alcanzó índices cercanos al 18%, la corrupción oficial continuó siendo el pan de cada día, y, sobre todo, la desacertada conducción de las conversaciones con las FARC, sumada a la falta de interés de esta organización en la paz, condujeron al fracaso del proceso, al desbordamiento de la violencia y a una profunda frustración de la mayoría de los colombianos. Si los escándalos de Samper y su gobierno sumieron a muchos en el pesimismo, el fracaso de los diálogos y el desbordamiento de la violencia a finales del mandato de Pastrana tuvieron un impacto similar. La emigración se intensificó de nuevo. Al mismo tiempo, Pastrana reconstruyó la legitimidad política interna e internacional del Gobierno, restableció relaciones con el mundo industrializado y las estrechó con EEUU, y, gracias a los recursos del Plan Colombia, inició el más notable fortalecimiento militar del Estado. Hay que destacar, además, que su excesiva generosidad con una organización arrogante como las FARC no fue inútil. Liquidó el aura de legitimidad que ésta había conquistado en el exterior.

Primeros resultados del gobierno de Álvaro Uribe (2002-2006). La firmeza de Uribe frente a las FARC le concedió la presidencia y le mantiene altos índices de popularidad. Para comprender esta situación, tal vez sería necesario haber vivido el desconcierto nacional en tiempos de Samper y el desencanto y hasta la rabia de muchos colombianos ante la actitud de las FARC en la mesa de conversaciones con el gobierno de Pastrana.

Una política exterior eficaz pero hipotecada

Uribe recibió un país rehabilitado en sus relaciones internacionales, en particular con EEUU. Su política exterior se ha centrado en una búsqueda pragmática



de apoyo internacional a la estrategia de seguridad. El presidente ha recabado ante todo el respaldo de Washington, incluso a costa de otros vínculos del país, de valiosas tradiciones diplomáticas y del mismo derecho internacional. Así, no dudó en respaldar la guerra contra Irak. A cambio, ha recibido un firme apoyo de la administración de George W. Bush. Independientemente de quien triunfe en las elecciones de noviembre en EEUU, no parece que este respaldo vaya a desaparecer: desde 1997, el conflicto colombiano se convirtió en objeto de preocupación bipartidista, el Plan Colombia fue iniciado por la administración de Bill Clinton, y a Washington le interesa mantener un frente de lucha antiterrorista no musulmán. Pero si triunfa John Kerry seguramente serán mayores las exigencias en el campo de los derechos humanos.

Con el ánimo de profundizar los intereses y el compromiso de la Casa Blanca en la lucha contra las organizaciones armadas en Colombia, Uribe ha impulsado también un acuerdo de libre comercio con EEUU. Washington aceptó la propuesta a condición de que las negociaciones se realizaran conjuntamente con Perú y Ecuador, que se iniciaron el 18 de mayo de 2004 y el acuerdo debe suscribirse antes de junio de 2005. Si triunfa Kerry es probable que introduzca normas más proteccionistas, lo cual dilataría la firma del convenio.

Los esfuerzos de Uribe por involucrar a la Unión Europea en su política de seguridad han sido menos exitosos. Las reticencias de Europa habían surgido ya en tiempos de Pastrana en torno del Plan Colombia. A este antecedente se sumó la campaña de desprestigio adelantada en el Viejo Continente por distintas ONGs en contra de Uribe. De modo que, si bien en la reunión celebrada en Londres en julio de 2003 el presidente obtuvo de los gobiernos europeos una declaración de apoyo a su política, éstos la condicionaron al cumplimiento de las 27 recomendaciones de la oficina de derechos humanos de la ONU en Bogotá.

Pese a sus reservas, los gobiernos europeos no han dejado de avalar la política de seguridad del Gobierno. Ya en 2003 habían declarado terroristas a las FARC y los paramilitares, y en abril de 2004 hicieron otro tanto con el Ejército de Liberación Nacional. Más allá de la deslegitimación que ella implica, esta declaración impide el reconocimiento político de tales agrupaciones, dificulta la libre circulación y diplomacia de sus miembros, y permite el bloqueo de sus cuentas bancarias. Por otra parte, dos gobiernos, el de Tony Blair en Inglaterra y el de José María Aznar en España, aliados de EEUU contra el terrorismo, le han dado a Colombia respaldo efectivo para la lucha contra las organizaciones ilegales. El impacto del 11-M en Madrid podría hacer más receptiva a la UE a las políticas de Uribe.

Uribe ha puesto casi toda la política exterior de Colombia al servicio de la seguridad

Las relaciones de Colombia con la ONU son más tensas que las que mantiene con Europa. Por su naturaleza, esa organización es más afín a las negociaciones de paz que a los esfuerzos de seguridad de Uribe. Y el presidente no ha escatimado críticas a la entidad así como solicitudes tan insistentes como inviables. Un triunfo demócrata en EEUU podría darle mayor peso a la ONU en el mundo y en Colombia. De la OEA, en cambio, Uribe consiguió la condena de los actos terroristas cometidos por las organizaciones ilegales y en particular del atentado que, en 2003, destruyó el club El Nogal, en Bogotá, causando numerosas víctimas, que, según fuentes oficiales, fue cometido por las FARC. Asimismo, ha recibido de la OEA un valioso aval político y el apoyo en las negociaciones con las Autodefensas.

El presidente ha buscado la solidaridad de América Latina en la lucha contra el «terrorismo». Con ese fin ha llevado al extremo la tesis estadounidense según la cual el conflicto colombiano sería la principal amenaza para la región, y ha procurado que los gobiernos del continente declaren terroristas a la guerrilla. Así lo obtuvo de los países centroamericanos, pero en América del Sur se topó con la abierta resistencia de los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva y de Hugo Chávez, y la más discreta de Lucio Gutiérrez. De los gobiernos de Ecuador y Perú ha logrado alguna cooperación en el control del contrabando de armas, drogas y otros implementos que transitan por las fronteras, lo cual le ha ocasionado fuertes críticas internas al gobierno ecuatoriano. Con Venezuela las relaciones son difíciles. A pesar de las diferencias políticas con Chávez, Uribe ha procurado mantener un acercamiento pragmático con su colega, sin embargo, en 2004, las tensiones han subido de tono y alimentan hipótesis de guerra en algunos sectores de ambos países. Es de esperar que la comunidad internacional prevenga cualquier escaramuza.

En suma, urgido por el grave conflicto interno, Uribe ha puesto casi toda la política exterior de Colombia al servicio de la seguridad. Y, aunque en lo inmediato ha obtenido abundantes réditos políticos, financieros y militares, su estrategia hipoteca las relaciones internacionales de Colombia, sobre todo con los vecinos.

Una economía en lenta recuperación

La economía colombiana experimentó un incremento negativo de -4,3% en 1999. En 2000 el ascenso fue de un modesto 2,92%; en 2001 el índice bajó a 1,39% y en

2002 tuvo un incremento de solo el 1,62%. La actividad económica se vio afectada por un entorno internacional negativo, pero también por la violencia interna, el fracaso de las conversaciones de paz y la desmoralización nacional.

En 2003, ya bajo el mandato de Uribe, la economía volvió a crecer un 3,74%. El déficit fiscal se redujo del 3,6% del PIB al 2,8%, cumpliéndose la meta acordada con el FMI. La inflación ha seguido disminuyendo y las tasas de interés son bajas. Las perspectivas para 2004, al menos hasta mediados de junio, apuntan a un crecimiento similar. En la recuperación ha influido la confianza suscitada por el liderazgo de Uribe y, sobre todo, por su política de seguridad. Pero han contribuido también factores como el alza en los precios internacionales del petróleo, el carbón, el oro y el café, la recuperación del comercio con Venezuela y Ecuador, el aumento de las exportaciones a EEUU y el ingreso de los empresarios a nuevos mercados en Centroamérica y el Caribe. Falta ver cuál será el impacto del acuerdo de libre comercio firmado por la Comunidad Andina de Naciones (CAN) con el Mercosur, cuyo lanzamiento está previsto en julio de 2004.

Para que la economía alcance una plena recuperación están pendientes, sin embargo, tres arduas tareas: el ajuste fiscal, el buen manejo de la deuda y la creación de empleo. En 1999, el déficit del sector público consolidado alcanzó el 5,5% del PIB y desde entonces ha descendido hasta 2,8% en 2003. La causa fundamental del desequilibrio se encuentra en el aumento de los gastos del Estado desde la Constitución de 1991, mientras la recaudación tributaria sigue siendo insuficiente. Además, el gobierno central no ha cumplido su promesa de limitar el gasto. La mayor parte de sus nuevos recursos se destinan al gasto militar. Esto plantea la pregunta por la sostenibilidad financiera de la política de seguridad.

En cuanto a la deuda externa, el saldo total llegó en 2003 casi al 50% del PIB. Dentro de ese monto la deuda pública representa el 32% del producto y la privada alcanza el 18%. El 54,9% del saldo de la deuda externa debe cancelarse antes de cinco años. Esta exposición del país podría explotar ante una devaluación que elevaría excesivamente el costo de las obligaciones en dólares, y podría traer consigo una suspensión del refinanciamiento de la deuda, causando un daño adicional a la economía.

Finalmente, la tasa de desempleo viene reduciéndose muy lentamente. En el mes de septiembre, menos propenso que diciembre a factores estacionales, las tasas de 2002 y 2003 fueron de 15,3% y 14,3%, respectivamente. Tras una ligera

mejoría, en mayo de 2004 el desempleo ascendió de nuevo a este último índice. Además, las nuevas ocupaciones son en su mayoría precarias.

Una esquiva reforma política

Una de las promesas centrales de Uribe fue la «lucha contra la corrupción y la politiquería». De conformidad con este lema, en su primer año aplicó una estrategia de confrontación con el Congreso. Nombró en el Ministerio del Interior a un cáustico polemista, y asumió la realización inmediata de la reforma política mediante referendo. Pero el Gobierno sufrió, en octubre de 2003, una estruendosa derrota. Ninguno de los puntos de la consulta fue aprobado. Al fracaso en el referendo se sumó la derrota de los postulantes a las Alcaldías más afines al oficialismo. En las tres principales ciudades, Bogotá, Medellín y Cali, triunfaron candidatos independientes o de oposición. La derrota más sensible la sufrió el Gobierno en Bogotá, donde Luis Eduardo Garzón, antiguo dirigente sindical y jefe del Polo Democrático, agrupación de centro izquierda, obtuvo la victoria. Los colombianos demostraron así que su respaldo a Uribe no significa un cheque en blanco ni una renuncia a la búsqueda de nuevas opciones para el país.

La estrategia más poderosa de Uribe frente a la clase política es la de los concejos comunitarios de gobierno

Tras el fracaso, Uribe comenzó a negociar con el Congreso. Sustituyó al polémico encargado de Interior por un conciliador dirigente gremial, quien propuso un Acuerdo Político entre las distintas fuerzas para concertar una agenda legislativa que comprende proyectos tan importantes como la reestructuración del sistema tributario, la reforma del sistema de pensiones, el estatuto antiterrorista, la reforma al Código Penal, etc. Pero los grupos independientes y de oposición no participaron en el encuentro, y los presentes solo llegaron a un acuerdo difuso. De tal manera que el Gobierno ahora enfrenta una ardua tarea.

No obstante, el pulso con el Legislativo no ha terminado. Uribe guarda dos ases bajo la manga. En primer lugar, seguidores suyos comenzaron desde temprano a promover su reelección. Durante meses el presidente evadió el tema pero, finalmente, en abril de 2004, dio su respaldo público a la propuesta. Acto seguido, el Gobierno presentó el proyecto de reforma constitucional, cuyo debate ha polarizado al Congreso. Ante una posible reelección, es probable que muchos parlamentarios opten por respaldarlo. Más aun cuando el Gobierno, según se afirma, estaría repartiendo prebendas entre quienes lo apoyen, en

desmedro de su anunciada «lucha contra la politiquería». Una eventual campaña de Uribe para su reelección en 2006, podría producir una convergencia electoral de movimientos de izquierda y de oposición con sectores del Partido Liberal, y hasta un claro reordenamiento bipolar del sistema de partidos.

La estrategia más poderosa de Uribe frente a la clase política es la de los concejos comunitarios de gobierno. En el desarrollo de su «estado comunitario», el presidente, acompañado de sus ministros, se reúne todos los sábados en alguna localidad con representantes de la población, atiende durante todo el día sus quejas y reclamos, adopta soluciones, compromete a los funcionarios o responde en tono coloquial que el asunto no se puede resolver porque «no hay platica». Los concejos son transmitidos por televisión. El espectáculo restablece un vínculo de confianza entre gobernante y ciudadanos, importante en medio de un conflicto como el que vive Colombia. Pero, al mismo tiempo, debilita partidos e instituciones en favor de la figura presidencial. Aunque la Constitución de 1991 limitó el poder presidencial, la esperanza de muchos colombianos en un Ejecutivo fuerte continúa robusteciéndose en contra del Congreso. Así, pues, aunque los parlamentarios ganaron terreno con el fracaso del referendo, el pulso con el Gobierno no ha concluido.

Uribe adelanta además una profunda transformación del Estado y de la Constitución de 1991. Fusionó ministerios, ha dado señales de querer recortarle poderes a la Corte Constitucional, quiere restringir la cobertura del mecanismo de tutela, busca disminuir las cargas financieras de la descentralización, recortar las facultades del Legislativo y reforzar el poder presidencial. En suma, el presidente adelanta una contrarreforma constitucional.

La Seguridad Democrática

Uribe ha concentrado los mayores esfuerzos de su gobierno en la política de Seguridad Democrática. Con ese título adelanta una intensa ofensiva diplomática y militar contra el «terrorismo» y el narcotráfico, identificados por el Gobierno con la guerrilla y los paramilitares. El principal frente de combate se desarrolla en el campo militar contra las FARC. El Gobierno se propone recuperar o establecer el control del Estado sobre todo el territorio nacional y, luego, consolidarlo mediante presencia institucional, creación de empleo e inversión social. Para recuperar el control del país, ha incrementado el número de miembros de las fuerzas militares y de policía, ofrece protección en las carreteras, se ha propuesto resguardar la infraestructura económica, ha desarrollado redes de cooperación ciudadana que informan a las autoridades sobre posibles

delitos y delincuentes, y ha incentivado la deserción de guerrilleros y paramilitares. Los resultados son notorios, aunque no todos se deban a la política gubernamental.

Según fuentes oficiales, entre el 7 de agosto de 2002, fecha de la toma de posesión presidencial, y el 31 de diciembre de 2003, la fuerza pública capturó a más de 8.900 integrantes de los grupos subversivos. El número de bajas se incrementó en un 39%. El Gobierno adelanta también una ofensiva contra los paramilitares, aún muy insuficiente. De estos grupos fueron dados de baja 435 integrantes, y se capturó a 3.908. Durante el mismo periodo se han presentado 4.310 desmovilizaciones de integrantes de los distintos grupos armados al margen de la ley. El número total de secuestros disminuyó en 22,4%. La estrategia de seguridad en las carreteras ha logrado que el número de secuestros en retenes ilegales disminuya en 50%, y las víctimas de ese tipo de secuestro en 43%. En 2003, el número de desplazados disminuyó en 40% con respecto a 2002. En febrero de 2003, la Policía los había regresado a los 157 municipios de donde tiempo atrás habían sido desalojados por la guerrilla.



A pesar de estos logros, los jefes máximos de las FARC y sus estructuras orgánicas permanecen intactos. Por ello, algunos analistas hablan de un mero «repliegue táctico» de esta guerrilla. En todo caso, el Ejército adelanta el Plan Patriota contra los altos mandos de las FARC. Unos 17.000 soldados avanzan en su búsqueda por las selvas del sur del país. La operación puede durar dos o tres años, y los resultados, decisivos para la política de seguridad, son aún inciertos.

Con la convicción de que el principal combustible del conflicto son los dineros del narcotráfico, Uribe ha emprendido la campaña más intensa contra las distintas fases del negocio. Según la Oficina contra las Drogas y el Delito de la ONU (Unocd), Colombia pasó de tener 102.000 hectáreas de coca en diciembre de 2002 a 86.300 en 2003. El gobierno de Uribe ha extraditado a 139 colombianos, en su mayoría solicitados por narcotráfico por la justicia norteamericana.

El gran desafío para Colombia se deriva del conflicto armado interno y sus vínculos con el narcotráfico

Asimismo, la unidad antinarcóticos adelanta la más ambiciosa labor de extinción de dominio sobre los bienes de narcotraficantes. La política de EEUU contra las drogas ha encontrado así su plena aplicación.

Entretanto, el Gobierno ha iniciado controvertidas conversaciones con las Autodefensas. El proyecto inicial, de Alternatividad Penal, preveía una amplia impunidad para los integrantes de estos grupos que abandonaran las armas y se reintegraran a la vida civil. Las críticas obligaron al Gobierno a presentar un nuevo plan, que contempla sanciones moderadas y procesos de verdad, justicia y reparación, pero los jefes de las Autodefensas se niegan a aceptar algún tipo de sanción. El tema produjo un fuerte debate interno que parece haber conducido, entre otras cosas, en mayo de 2004, al atentado y la desaparición de Carlos Castaño, creador y antiguo jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quien se había manifestado dispuesto a aceptar las nuevas condiciones. Sin embargo, 10 de ellos han querido concentrarse, con sus cuerpos de seguridad, en una zona reducida al norte del país, en la cual, a diferencia de lo sucedido en la extensa área cedida a las FARC, seguirían funcionando las instituciones y autoridades estatales, además de la supervisión de la OEA.

A comienzos de junio se ha producido una sorpresiva convergencia entre una inesperada propuesta de paz del presidente Uribe al ELN y la inmediata respuesta positiva de esa organización. El gobierno de México opera como facilitador de las conversaciones, pero es muy temprano para saber cuál será el curso de estos acercamientos.

Un futuro aún incierto

Colombia enfrenta, pues, enormes retos. Para resolver los urgentes problemas económicos se requieren profundas reformas estructurales, aplazadas ahora por los debates sobre la reelección presidencial. Se necesita depurar y fortalecer los partidos, hoy en franca desintegración, lo que Uribe está lejos de propiciar. En estos aspectos, la situación de Colombia no difiere de la de sus vecinos y es incluso menos preocupante que la de algunos de ellos.

El gran desafío para Colombia se deriva del conflicto armado interno y sus vínculos con el narcotráfico. Si los diálogos con el ELN y las Autodefensas avanzaran de modo simultáneo, se reforzarían mutuamente y abrirían horizontes a

la paz. Además, si se llega a un acuerdo con las Autodefensas, mejoraría la posibilidad de negociar con las FARC, que han puesto siempre como condición de cualquier arreglo la desaparición de estos grupos. Pero el camino está plagado de trampas. La discrepancia entre las exigencias de justicia de la opinión nacional e internacional y el rechazo de toda sanción por parte de los paramilitares, hace muy difíciles las negociaciones, tanto más cuanto que Washington se muestra inflexible en la solicitud de extradición de varios jefes de las Autodefensas, supuestamente implicados en el narcotráfico. Si se firmara la paz y el Estado no fuera capaz de suplir a las Autodefensas, volverían a surgir grupos similares. Por otra parte, si no se los despoja de las extensas tierras de las que se han apoderado, sus jefes –presuntos narcotraficantes transformados en terratenientes– se convertirían en poderosos dirigentes territoriales, con una temible influencia local y nacional. Si las conversaciones se rompen, Estado y Autodefensas quedarían abiertamente enfrentados y sería factible que guerrillas, paramilitares y narcotraficantes emprendieran una ofensiva simultánea contra la política norteamericana y el Estado colombiano. El conflicto alcanzaría entonces una intensidad desconocida y podría motivar una más amplia intervención externa.



Por otra parte, para que la autoridad estatal pueda consolidarse, se requiere no solo del control militar sino de abundante creación de empleo e inversión social, para los cuales, el Estado y la sociedad colombiana carecen actualmente de los recursos indispensables. En toda esta situación subyace una funesta ambigüedad. Desde hace más de 20 años, Washington le suministra a Colombia una droga que, a la vez que alivia los síntomas, introduce e intensifica la enferme-

dad. En efecto, la guerra contra el narcotráfico frena tal vez los ingresos de las organizaciones armadas ilegales pero, al mismo tiempo, eleva la rentabilidad del negocio, contribuyendo a expandirlo y fortalecerlo, convirtiéndolo de paso en el principal combustible financiero de la violencia y en la mayor fuente de corrupción. Sin embargo, agobiado por estos males, el país se ha visto obligado a solicitar la ayuda de EEUU. Pastrana no tuvo otra alternativa que acordar el Plan Colombia, convertido por Washington de plan de paz en estrategia antidrogas. Uribe ha elevado al tope la dosis de la misma medicina enfocando todos los recursos nacionales y extranjeros hacia la lucha contra el «narcoterrorismo», y, por el momento, ha logrado un importante alivio nacional, pero no es imposible que esa política le abra camino a males peores como los que hemos señalado. Esta contradicción mina a Colombia, pero el país no está en capacidad de cuestionar por sí solo la política de Washington.

A pesar de todo, es sorprendente la estabilidad colombiana. El Estado ha recuperado el control sobre el territorio nacional, la seguridad ciudadana ha mejorado y muchos nacionales han recobrado la confianza en el futuro, como lo demuestra el crecimiento de la inversión y el retorno de numerosos emigrantes y sus capitales. La economía experimenta una incipiente recuperación, y aunque los partidos se encuentran muy debilitados, el país cuenta con nuevos y serios liderazgos individuales en todas las vertientes políticas, que van desde la centroizquierda y la del centro-centro hasta la centroderecha. Estas circunstancias permiten esperar que Colombia evite aventuras políticas, así sea la de temer un creciente peso del caudillismo presidencialista en desmedro del sistema de partidos, las instituciones y la misma democracia.

Referencias bibliográficas

Banco de la República: *Informe al Congreso*, marzo de 2004.
DNP: Indicadores de Coyuntura Económica, marzo de 2004.
Pizarro Leongómez, Eduardo: *Una democracia asediada: balance y perspectivas del conflicto armado en Colombia*, Norma, Bogotá, 2004.
Ramírez, Socorro: «El Plan Colombia: impacto nacional y regional» en *Pensamiento Propio* 1-6/2003, Cries, Buenos Aires, pp. 61-82.
Restrepo, Luis Alberto: «De Pastrana a Uribe: continuidad y rupturas» en *Síntesis 2002-2003: anuario social, político y económico de Colombia*, Iepri / Fescol / Nueva Sociedad, Bogotá, 2004.
Tokatlian, Juan Gabriel: «Colombia: guerra interna, inseguridad regional e intervención externa» en Álvaro Camacho (ed.): *El conflicto colombiano y su impacto en los países andinos*, Ceso Uniandes, Bogotá, 2003, pp. 53-80.
Valencia, León: *Adiós a la política, bienvenida la guerra: secretos de un malogrado proceso de paz*, Intermedio, 2002.